

Capítulo 12

Marwa Marwa

¿UN ARMA DE DOBLE FILO? LA COVID-19 Y LA REMUNICIPALIZACIÓN DEL AGUA EN YAKARTA

Yakarta se ha convertido en el epicentro del brote de covid-19 en Indonesia. Aunque se ha promovido el lavado de manos como la medida preventiva más eficaz, la gobernanza desigual del agua ha dificultado el acceso de los pobres urbanos a un suministro adecuado. Los críticos de la privatización del agua en Yakarta llevan mucho tiempo argumentando que la remunicipalización sería la mejor manera de abordar estas desigualdades, y la crisis de la covid-19 ha dado un nuevo impulso a esta lucha. Sin embargo, este capítulo analiza las razones por las cuales la covid-19 podría ser un arma de doble filo para el proceso de remunicipalización. Al mismo tiempo que aumenta la presión a favor de la remunicipalización del agua, las repercusiones sociales y económicas de la pandemia han permitido al gobierno nacional y a los organismos internacionales de desarrollo promover la privatización. Como resultado, el futuro de la propuesta de remunicipalización del servicio de agua de Yakarta sigue siendo incierto.

INTRODUCCIÓN

A mediados de 2020 Yakarta era la segunda región de Indonesia más afectada por la covid 19, con casi el 20% de los 95.418 casos confirmados del país (Government of Indonesia, 2020). El gobier-

no provincial ha promovido un estilo de vida saludable e higiénico, mediante el fomento del lavado de manos como una de las medidas preventivas más eficaces para frenar la propagación del virus. Sin embargo, será difícil que la campaña tenga éxito habida cuenta de la desigual gobernanza del agua en Yakarta, que afecta de manera desproporcionada a los ciudadanos, especialmente a los pobres de las ciudades. La falta de acceso adecuado al agua se agrava en los asentamientos densamente poblados que carecen de infraestructuras básicas adecuadas, como instalaciones de saneamiento y alcantarillado, lo que aumenta el riesgo de infecciones por la covid-19.

La Coalición de Residentes de Yakarta que se oponen a la privatización del agua (KMMSAJ, por sus siglas en indonesio) ha puesto de manifiesto el fracaso de la gobernanza de los servicios de agua de Yakarta a la hora de proporcionar un acceso adecuado al agua a sus ciudadanos. Desde 2011, esta coalición de grupos ha criticado duramente la actual forma privatizada de gobernanza del agua y ha exigido que la administración municipal se haga cargo de la gestión como un servicio público, es decir, remunicipalizarlo.

En este contexto, la remunicipalización no solo implica que la empresa de agua pase a manos públicas, sino también que cambie la actual gobernanza del servicio, redefiniendo el acceso al agua como un derecho humano y ampliando el espacio de participación pública (Lobina et al. 2019). Tras años de lucha, la movilización en favor de la remunicipalización del agua cobró un importante impulso en 2019, cuando el gobernador de Yakarta, Anies Baswedan, aceptó finalmente remunicipalizar el sector del agua. Por lo tanto, teniendo en cuenta sus objetivos emancipadores, la remunicipalización del agua de Yakarta ha despertado la esperanza de una mejor prestación de esos servicios, especialmente para las comunidades de bajos ingresos (Atika 2019).

El objetivo de este capítulo es analizar en qué medida la crisis de la covid-19 ha afectado el proceso de remunicipalización del agua en Yakarta y sus posibles repercusiones en la mayor desigualdad en el acceso a este servicio esencial. A partir de una combinación

de datos primarios y secundarios, informes de prensa y entrevistas en línea con actores clave de la coalición de organizaciones sociales que promueve la remunicipalización, se argumenta que la covid-19 tiene el potencial de ser un arma de doble filo. Por un lado, ha aumentado la urgencia de la remunicipalización del agua y ha obligado a la coalición a modificar algunas de sus estrategias. Y, por otro, las repercusiones sociales y económicas de la pandemia han permitido al gobierno nacional y a las agencias internacionales de desarrollo promover la privatización a escala local. Por lo tanto, el futuro de la remunicipalización de Yakarta sigue siendo incierto.

Para la exposición del estudio de caso, el capítulo está estructurado en tres secciones. En primer lugar, se analiza el modo en que la covid-19 ha agravado la desigualdad existente en Yakarta en materia de agua, produciendo una distribución desproporcionada de la carga y el riesgo sobre los pobres urbanos. A continuación, se analiza cómo la pandemia ha influido en el proceso de remunicipalización del agua de Yakarta en el contexto del desarrollo del movimiento popular y en consideración de debates políticos. Por último, el capítulo presenta las lecciones aprendidas del proceso de remunicipalización del agua de Yakarta y discute la maximización de su potencial de transformación para hacer frente a la persistente desigualdad del agua en la ciudad.

EL AGUA Y LA DESIGUALDAD EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA

La exclusión de las comunidades de bajos ingresos en la estructura de gobernanza del agua de Yakarta es un tema que se ha investigado extensamente (Bakker et al. 2008, Colbran 2017, Kooy et al. 2018, Kurniasih 2008, Putri 2016). Se ha propuesto el concepto de archipiélago de élite para describir la infraestructura hídrica heredada del período colonial bajo el dominio de los Países Bajos (Bakker et al. 2008, 1897). La red se concentra en las zonas de ingresos medios y altos, lo que hace que el acceso al agua en Yakarta esté fragmentado social y espacialmente. En 1997, la empresa de agua de la ciudad,

PAM Jaya, fue transferida oficialmente a dos multinacionales del sector hídrico, Suez y Thames, que operaban a través de las empresas subsidiarias Palyja y Aetra. Estas empresas gestionaron el servicio en las zonas occidental y oriental de la ciudad, respectivamente, mediante una concesión de 25 años. Este plan fue concebido como una asociación público-privada en la que PAM Jaya actúa como propietaria de las instalaciones, transfiriendo la gestión operativa –que incluye las áreas de tratamiento del agua, la construcción de nuevas conexiones y el cobro de tarifas– a los dos operadores privados.

Sin embargo, desde el principio, las partes interesadas eran conscientes de que proporcionar acceso a las comunidades de bajos ingresos no interesaba a los operadores privados, debido a la preocupación por la recuperación de los costes y la incertidumbre de la inversión. En respuesta a esta situación el gobierno exigió a la empresa de servicios públicos y a los operadores privados que aplicaran un sistema de tarifas en bloque y mecanismos de pago flexibles para que los hogares de bajos ingresos completaran el pago de una conexión inicial en un plazo de 12 meses (Lanti 2006). El esfuerzo de legitimización de la privatización del agua como respuesta a la desigualdad del acceso al agua también ha contado con el apoyo de la ayuda financiera de los organismos de desarrollo. Por ejemplo, en 2007 el Banco Mundial concedió a la empresa Palyja 2,57 millones de dólares para subvencionar las cuotas de los hogares de bajos ingresos (Menzies y Setiono 2010). Otro ejemplo fue el programa de instalación de contadores patrocinado por la agencia de desarrollo estadounidense USAID, puesto en marcha en 2015 para conectar a familias de bajos ingresos carentes de títulos de propiedad o documentos de identidad. Estas estrategias fueron presentadas como iniciativas a favor de los pobres que proporcionarían “el vínculo que faltaba entre el bienestar de los pobres y las necesidades financieras del sector privado” (Mumssen et al. 2010, citado por Padawangi y Douglass 2015, 122).

A pesar de estas políticas, el número de hogares de bajos ingresos conectados a la red sigue siendo bajo. Según el Organismo

Regulador del Agua de Yakarta (JWRB, en sus siglas en indonesio), la cobertura del servicio de la red se encuentra actualmente en un máximo histórico del 40%, donde los consumidores de clase media representan el número más significativo de clientes de las empresas de agua privadas (Kooy et al. 2018). El bajo número de conexiones de agua corriente entre los hogares de bajos ingresos puede explicarse de dos maneras. Desde el punto de vista de la oferta, a los operadores privados no les interesa conectar a los hogares de bajos ingresos, especialmente los situados en asentamientos informales, dada la baja o nula rentabilidad de estas operaciones. Desde el punto de vista de la demanda, las comunidades de bajos ingresos se enfrentan a barreras estructurales para conectarse, ya que muchos residentes en asentamientos informales no pueden demostrar su condición de residentes o de propietarios de la tierra, y por lo tanto se considera que no son elegibles para una conexión a la red de agua corriente (Colbran 2017).

Mientras tanto, para quienes ya están conectados a la red, la privatización del agua ha significado constantes aumentos de tarifas y un servicio de baja calidad. Desde que se implantaron por primera vez en 1997, las tarifas del agua se han revisado siete veces y han aumentado diez veces (Zamzami y Ardhianie 2015). Pero el aumento de las tarifas no ha ido acompañado de una mejora de la calidad del servicio, ya que el suministro de agua es cada vez más intermitente y errático, y los hogares de bajos ingresos de la periferia de la red tienen acceso, pero con una presión de agua muy baja (Padawangi y Vallée 2017, Marwa 2019a). En cambio, los distritos comerciales y los barrios acomodados de la ciudad disfrutaban de un acceso más fiable al agua potable (Heriyanto 2018).

Ante la deficiencia o ausencia de conexiones a la red de agua corriente, las comunidades de bajos ingresos se ven obligadas a buscar alternativas tales como pozos para extraer aguas subterráneas (Colbran 2009). Sin embargo, la explotación masiva de las aguas subterráneas ha dificultado cada vez más el acceso de los hogares con bajos ingresos, especialmente los que viven en la zona costera

de la ciudad, ya que las aguas subterráneas poco profundas se han agotado y salinizado (Abidin 2014). En consecuencia, los hogares de bajos ingresos recurren a diversos métodos de acceso, como la compra de agua a los vecinos o a los vendedores de agua en carros y los camiones cisterna (Marwa 2019a). En Penjaringan, un asentamiento de bajos ingresos en el norte de Yakarta, alrededor del 88% de los residentes de menores ingresos compran agua a sus vecinos (Kooy et al. 2018).

Estas prácticas de acceso al agua resultan entre 40 y 60 veces más caras que el agua corriente subvencionada y son de calidad dudosa. Según la Oficina de Estadísticas de Indonesia (BPS, por sus siglas en indonesio), en el año 2019 los hogares de bajos ingresos gastaron el 36% de sus ingresos en cubrir sus necesidades diarias de agua (Surjadi 2019), y dedicaron un tiempo considerable a desplazarse para recolectar agua. En tiempos de covid-19, acceder al agua de esta manera se convierte en todo un reto logístico y económico. La política del gobierno provincial de distanciamiento físico a gran escala ha dificultado el mantenimiento de los ingresos familiares generados por la economía informal de la calle (Wilson 2020). En consecuencia, la disminución de los ingresos no se corresponde con los gastos domésticos elevados para acceder al agua, por lo que las comunidades de bajos ingresos tienen que restringir el lavado de manos y otras actividades de higiene personal.

Asimismo, las repercusiones económicas de la covid-19 también han dificultado que las familias de bajos ingresos conectadas a las redes de agua corriente puedan cumplir con el pago mensual de la tarifa de agua, por lo que corren el riesgo de que se les corte el suministro. Tanto Palyja como Aetra siguen exigiendo el pago a todo tipo de clientes, cuyas facturas se calculan en función del consumo medio de los últimos tres meses. La política de corte del servicio sigue siendo aplicable cuando el cliente no paga la factura. Un ejemplo claro fue el corte de agua a hogares de bajos ingresos en la zona este de Yakarta, donde varios residentes no pudieron pagar la factura debido a la pérdida de ingresos del hogar (Setiawan 2020).

En consecuencia, ante las dificultades de acceso al agua y el saneamiento, la desigualdad en Yakarta ha empeorado con la crisis de la covid-19, con mayores riesgos de contagio y propagación del virus en las comunidades de bajos ingresos. Por lo tanto, es evidente que las desigualdades agravadas por la covid-19 han atrapado a las comunidades de bajos ingresos en un círculo vicioso de vulnerabilidad del que solo podrían escapar a través de una transformación de la estructura de gobernanza del agua de Yakarta.

COVID-19: MOMENTUM OR CHALLENGE?

Las críticas a la desigualdad en el acceso al agua en Yakarta han sido frecuentes desde la primera época de la privatización (Ardhianie 2006). Al igual que la mayoría de las críticas contra la privatización, se basaron en la noción del derecho humano al agua como contradictoria con la práctica de la privatización del agua. Esta noción se manifestó en 2002 con la creación de la Coalición Popular por el Derecho al Agua (KRuHA, por sus siglas en indonesio). Sus objetivos eran promover el derecho humano al agua y oponerse a la mercantilización y privatización del sector. Más tarde, en 2011, la KRuHA organizó una coalición cívica más amplia, conformada por diferentes actores con diversas preocupaciones sociales y medioambientales, conocida como Coalición de Residentes de Yakarta Contra la Privatización del Agua (KMMSAJ, por sus siglas en indonesio). Posteriormente, la coalición evolucionó hasta convertirse en un movimiento por la remunicipalización cuyo objetivo no es solo la transferencia de la propiedad del sector del agua, sino también una mayor participación ciudadana que asegure el derecho humano al agua (Lobina et al. 2019).

La lucha por la remunicipalización continúa. La pandemia y la necesidad de un acceso equitativo al agua han reforzado su urgencia y han dado nuevos bríos a los argumentos a favor de un modelo alternativo de gobernanza para revertir la persistente desigualdad del acceso al agua en Yakarta (Atika 2019). La KMMSAJ aprovechó

este impulso para reafirmar que el operador privado no ha proporcionado un acceso adecuado, fiable y asequible a las comunidades de bajos ingresos durante la crisis de la covid-19. Los representantes de la Fundación de Asistencia Jurídica de Yakarta, una organización integrante de la KMMSAJ, argumentaron que la privatización del agua había convertido este elemento en una mercancía de acceso exclusivo para las clases medias y altas (Ambari 2020). En la misma línea, la KMSSAJ publicó una declaración oficial dirigida a los organismos municipales de Yakarta responsables de la gobernanza del agua, con las siguientes demandas (Ambari 2020):

- el control del Estado sobre los recursos hídricos para el mayor beneficio de la población, tal y como establece el artículo 33 de la Constitución de Indonesia;
- que el gobernador de Yakarta rescinda los contratos de privatización del agua con los dos operadores privados y devuelva el servicio al control público;
- que el gobierno municipal de Yakarta garantice la disponibilidad y el acceso al agua potable para todos los residentes, especialmente las comunidad de bajos ingresos y marginalizadas, para contener la propagación del virus de la covid-19 y proteger la salud pública;
- que el órgano legislativo municipal garantice que el gobernador de Yakarta cumpla con su deber constitucional de controlar y gestionar el agua para el bienestar de los residentes;
- que se habilite la participación de la ciudadanía en los procesos de gobernanza y toma de decisiones en materia de agua en Yakarta;
- que la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) supervise el proceso de traspaso de la gestión del agua a las autoridades municipales de Yakarta, propensas a la corrupción.

Además de las demandas generales de la KMMSAJ, algunas organizaciones también exigieron una respuesta específica de emer-

gencia en materia de agua para las comunidades de bajos ingresos, especialmente para las residentes en asentamientos informales. El requerimiento incluía la instalación de espacios higiénicos para el lavado de manos y ayudas económicas para cubrir el consumo de agua. Lamentablemente, PAM Jaya sólo dio respuesta a la solicitud de instalaciones para el lavado de manos, con la habilitación de espacios en un tercio de los asentamientos informales, mientras que la demanda de apoyo para el pago del consumo de agua no obtuvo ninguna respuesta (G. Muhammad, entrevista personal, 2020). No obstante, la KMMSAJ sigue haciendo circular estas demandas en medios de prensa y plataformas en línea con la esperanza de que el gobierno local responda a las políticas. La KMMSAJ también está promoviendo debates políticos, seminarios y conferencias en línea (M. Reza, comunicación personal, 10 de junio de 2020; G. Muhammad, entrevista personal, 2020). Estas estrategias funcionan bien para aumentar la presión pública, dado que las estrategias tradicionales de movilización, como las concentraciones y las marchas, no son posibles durante la pandemia.

La crisis de la covid-19 ha motivado a KMMSAJ no solo a utilizar una plataforma en línea, sino a replantear su estrategia (M. Reza, comunicación personal, 10 de junio de 2020). En el pasado, la estrategia de la KMMSAJ y sus consecutivas victorias legales habían generado mucho interés en el país, con avances concretos hacia la remunicipalización del agua en Indonesia (Marwa 2019b). Pero la crisis de la covid-19 ha dificultado la impugnación de la privatización a través de estrategias legales, ya que el gobierno nacional ha elaborado diversas normativas favorables a las empresas para atraer inversores extranjeros, en el marco de políticas que el gobierno considera necesarias para la recuperación económica después de la pandemia (Harsono 2020). Un ejemplo de ello es la controvertida ley ómnibus sobre la creación de empleo, que pretende fomentar más inversiones mediante la desregulación del sector laboral, la flexibilización de la protección medioambiental y la privatización de infraestructuras que antes eran propiedad del Esta-

do, como la electricidad. Unos de los artículos de legislación que se han propuesto –y que supone un reto especial para la lucha por la remunicipalización del agua– es la promoción de una modalidad centralizada de gobernanza de los recursos para facilitar actividades empresariales que se vean obstaculizadas por las normativas locales (Eloksari 2020).

Como alternativa a la estrategia basada en disputas judiciales, un representante de la KRuHA defendió la importancia de vincular la lucha por la remunicipalización del agua con movimientos más amplios por la justicia social y ambiental. La ley ómnibus ha generado la oposición de organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y de organizaciones ecologistas que han criticado que se priorice el crecimiento económico sobre la justicia social y ambiental (Jakarta Post 2020). Un representante de la KRuHA describió la situación actual como una “vuelta a la época posterior a la reforma” (M. Reza, comunicación personal, 10 de junio de 2020). Sostuvo que, dado que los movimientos sociales se ven obligados a absorber tantos temas al mismo tiempo, resulta más difícil para las organizaciones de base influir en el debate público (M. Reza, comunicación personal, 10 de junio de 2020). Por lo tanto, en lugar de centrarse en la narrativa sectorial del acceso al agua urbana y competir con otros movimientos, la KRuHA vincula la lucha por la remunicipalización del agua con otras luchas por la justicia social y el medio ambiente a escala nacional para reclamar el control público sobre los recursos hídricos. Esta estrategia está en consonancia con el concepto de *Semesta Air*, que encarna una idea holística del agua que conecta a los seres humanos con el medio ambiente en varias escalas y establece conexiones con diferentes tipos de aguas superficiales basadas en ciclos hidrológicos (Lobina et al. 2019).

Lamentablemente, las crecientes demandas y movilizaciones a favor de la remunicipalización no han acelerado el proceso en un sentido pragmático de transferencia de la propiedad o en términos de mayor participación pública en la gobernanza del agua. El gobernador de la ciudad, Anies Baswedan, había prometido en el año

2018 asumir gradualmente el control del agua de Yakarta, pero su administración no ha mostrado ningún progreso significativo en esta dirección, excepto una renegociación de contrato en curso entre PAM Jaya y dos operadores privados. Esto se debe en parte a las incoherencias del gobierno local de Yakarta a lo largo del proceso de remunicipalización; por un lado ha convocado a un equipo especial de asesores para apoyar este proceso, pero por otro lado ha designado a un exdirector de Aetra para su dirección. Estas incoherencias han estancado el proceso de remunicipalización del agua, ya que el gobierno local tiene que enfrentarse a la dura oposición de dos operadores privados y del gobierno nacional (M. Reza, comunicación personal, 10 de junio de 2020).

Aunque las negociaciones siguen teniendo lugar a puerta cerrada, la crisis de la covid-19 ha servido en realidad para intensificar las presiones a favor de la privatización, ya que sus defensores argumentan que contribuiría a la recuperación económica de la ciudad. Las agencias internacionales de desarrollo, como el Banco Mundial, han promovido el capital privado como la única solución para financiar proyectos de infraestructura masivos (Bigger y Webber 2020). Esta presión ha hecho que el gobierno local de Yakarta apoye la idea de asociaciones público-privadas. Por ejemplo, el gobernador de Yakarta ha dado recientemente luz verde al controvertido Proyecto de Desarrollo Costero Integrado de la Capital Nacional (NCICD, por sus siglas en indonesio) como parte de una estrategia de mitigación de inundaciones. El elevado coste de la inversión, de hasta 40.000 millones de dólares, se amortizaría a través de una asociación público-privada (Both ENDS, SOMO y TNI 2017; Nurbaiti 2020).

Como resultado, los intercambios sobre la remunicipalización del agua entre las élites gubernamentales se han aplazado, mientras que el enfoque de la discusión se ha limitado a la transferencia de la propiedad y la ampliación del acceso, sin reconocer la importancia de la participación ciudadana (Tambun 2019). El director de PAM Jaya también utilizó a la covid-19 como excusa para transformar el

debate en una discusión puramente técnica sobre la distribución del agua, dejando de lado las persistentes desigualdades que caracterizan la gobernanza del agua en Yakarta. Cuando se le planteó la cuestión de la remunicipalización del agua, se limitó a decir que la empresa se centraría en el suministro de agua limpia añadiendo 30.000 nuevos clientes en las zonas del norte y el oeste de Yakarta e instalando lavabos portátiles en algunos espacios públicos para hacer frente a la pandemia (Syakriah 2020).

REPENSAR LA REMUNICIPALIZACIÓN DEL AGUA

En conclusión, la crisis de la covid-19 ha exacerbado la desigualdad del agua en Yakarta y ha colocado a las comunidades de bajos ingresos en un círculo vicioso de vulnerabilidad. La coalición de base KMMSAJ ha aprovechado este impulso para poner de manifiesto la desigualdad en el acceso al agua en Yakarta y acelerar el proceso de remunicipalización. Teniendo en cuenta los límites de recursos y espacios como consecuencia de la crisis de la covid-19, la KMMSAJ se ha visto obligada a modificar algunas de sus estrategias, como trasladar sus actividades a Internet, utilizar estrategias que no se centren en aspectos judiciales y ampliar sus alianzas para mantener la presión popular a favor de la remunicipalización.

Sin embargo, esta presión no se ha traducido en una prioridad a nivel político. Los impactos económicos negativos de la covid-19 han motivado al gobierno nacional a promover la privatización para atraer más inversiones extranjeras, mientras que las agencias de desarrollo internacional han respaldado la inversión privada como la solución al doble dilema de la ciudad: infraestructura resistente y restricción fiscal.

Mientras tanto, el gobierno local, que ha sido inconsistente en su posición sobre la remunicipalización, ha autorizado proyectos de mitigación de inundaciones utilizando un esquema de asociación público privada. Por estas razones, la crisis de la covid-19 se ha convertido en un arma de doble filo en el proceso de remuni-

palización de Yakarta. Da impulso a la presión popular y, al mismo tiempo, refuerza a una élite favorable a la privatización.

REFERENCIAS

- Abidin, H.Z. 2014. Mapping and Analysis of Land Subsidence Impacts in Jakarta Area. 1–13.
- Ambari, M. 2020. Kebutuhan Air Bersih di Tengah Covid-19 Pandemi. *Mongabay*, 23 de marzo.
- Ardhianie, N. 2006. Water Privatisation in Indonesia. Yakarta: AMRTA Institute for Water Literacy.
- Atika, S. 2019. Jakarta's remunicipalization plan raises hope for better water service. *The Jakarta Post*. <https://bit.ly/38ndOQ8> (consultado el 14 de febrero de 2019).
- Bakker, K., Kooy, M., Shofiani, N. E. y Martijn, E. J. 2008. Governance Failure: Rethinking the Institutional Dimensions of Urban Water Supply to Poor Households. *World Development*, 36(10), 1891–1915. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.09.015>
- Bigger, P. y Webber, S. 2020. Green Structural Adjustment in the World Bank's Resilient City. *Annals of the American Association of Geographers*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/24694452.2020.1749023>
- Both ENDS, SOMO y TNI. 2017. Social justice at bay: The Dutch role in Jakarta's coastal defence and land reclamation. <https://bit.ly/2U3QRsJ> (consultado el 22 de octubre de 2019).
- Colbran, N. 2009. Will Jakarta be the next Atlantis? Excessive groundwater use resulting from a failing piped water network. *5/1 Law, Environmental Development Journal*, 5, 20–37.
- Colbran, N. 2017. Piped Water in Jakarta: A Political, Economic, or Social Good? In Langford, M. y Russell, A. (Eds.) *The Human Right to Water: Theory, Practice and Prospects*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Eloksari, E. A. 2020. Omnibus bill to diminish local governments' authority over spatial planning: KPPOD. *The Jakarta Post*. 27 de febrero.
- Harsono, N. 2020. House approves revised Mining Law amid outcry. *The*

- Jakarta Post*. 13 de mayo.
- Heriyanto, D. 2018. What you need to know about Jakarta's water privatisation. *The Jakarta Post*. 12 de abril.
- Joy, K. J., Kulkarni, S., Roth, D., y Zwarteven, M. 2014. Re-politicising water governance: exploring water re-allocations in terms of justice. *Local Environment*, 19(9) 954–973. <https://doi.org/10.1080/13549839.2013.870542>
- Kooy, M., Walter, C. T., y Prabaharyaka, I. 2018. Inclusive development of urban water services in Jakarta: The role of groundwater. *Habitat International*, 73, 109–118. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2016.10.006>
- Kurniasih, H. 2008. Water Not for All: The Consequences of Water Privatisation in Jakarta, Indonesia. Ponencia presentada a la 17th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia. Melbourne: Asian Studies Association of Australia.
- Lanti, A. 2006. A Regulatory Approach to the Jakarta Water Supply Concession Contracts. *Water Resource Development*, 22(2), 255–276.
- Lobina, E. 2016. Water remunicipalisation: Between pendulum swings and paradigm advocacy. En Bell, S., Allen, A., Hofmann, P. y The, T.-H. (Eds.) *Urban Water Trajectories*. Londres: Springer International Publishing.
- Lobina, E., Wegmann, V. y Marwa, M. 2019. Water Justice Will Not Be Televised: Moral Advocacy and the Struggle for Transformative Remunicipalisation in Jakarta. *Water Alternatives*, 12(2), 725–748.
- Marwa, M. 2019a. Changing Water Governance for the Urban Poor in an Informal Settlement: the Case Study of Penjaringan, North Jakarta. MSc Thesis. Londres: University College London.
- Marwa, M. 2019b. Changing Water Regime: Remunicipalization in Indonesia under the Global Hegemony of Privatization. *Global South Review*, 1(1), 6. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.33131>
- Menzies, I. y Setiono, M. 2010. Output-based aid in Indonesia: Improved access to water services for poor households in western Jakarta. Yakarta: The World Bank.
- Nurbaiti, A. 2020. Fishermen, activists decry Anies' decision to grant reclamation for Ancol expansion. *The Jakarta Post*. 4 de julio.

- Padawangi, R. y Douglass, M. 2015. Water, water everywhere: Toward participatory solutions to chronic urban flooding in Jakarta. *Pacific Affairs*, 88. <https://doi.org/10.5509/2015883517>
- Padawangi, R. y Vallée, M. 2017. Water Connections: Output-based aid for the urban poor and the pursuit of water justice in Jakarta, Indonesia. En Caniglia, B.S., Valée, M. y Frank, B. (Eds) *Resilience, Environmental Justice and the City*. Londres: Routledge.
- Putri, P. W. 2016. Moulding Citizenship: Urban Water and the (Dis)appearing Kampung. En Bell, S., Allen, A., Hofmann, P. y The, T.-H. (Eds.) *Urban Water Trajectories*. Londres: Springer International Publishing.
- Setiawan, R. 2020. Listrik & Air East Park Mati sebab Telat Bayar, PLN Temui Pengelola. *Tirto.Id*. 11 de junio.
- Surjadi, H. 2019. Jakarta Poor still Fighting for Tap Water. *The Jakarta Post*. October 12.
- Syakriah, A. 2020. Hand washing to counter COVID-19 still a luxury for Indonesia's urban poor. *The Jakarta Post*. March 24.
- Tambun, L. T. 2019. Ambil Alih Pengelolaan Air Minum, PAM Jaya Minta Pendampingan Kejati. *Berita Satu*. November 6.
- Jakarta Post. 2020. Omnibus law 'may sacrifice' human rights, environment. *The Jakarta Post*. 29 de enero.
- Wilson, I. 2020. Covid-19, inequality and Jakarta's urban poor: resilient, but at great risk. *Indonesia at Melbourne*. 11 de abril.
- Zamzami, I. y Ardhanie, N. 2015. An End to Struggle? Jakarta's Resident Reclaim Their Water System. En Kishimoto, S., Lobina, E. y Petitjean, O. (Eds) *Our Public Water Future: the Global Experience with Remunicipalisation*. Ámsterdam: Transnational Institute (TNI).

